

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Vista Número: 1984

Panamá, 20 de diciembre de 2018

**Proceso Contencioso
Administrativo
de Plena Jurisdicción.**

La Licenciada Indira De Sedas, actuando en nombre y representación de **Cecilia Esther Torres Tapia**, solicita que se declare nula, por ilegal, la Resolución Número 514-DDRH de 24 de agosto de 2016, emitida por la **Contraloría General de la República**, su acto confirmatorio y que se hagan otras declaraciones.

Contestación de la demanda.

Honorable Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia.

Acudo ante usted de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, con el propósito de contestar la demanda contencioso administrativa descrita en el margen superior.

I. Los hechos en que se fundamenta la demanda, los contestamos de la siguiente manera:

Primero: No es un hecho; por tanto, se niega.

Segundo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Tercero: No es un hecho; por tanto se niega.

Cuarto: Es cierto; por tanto, se acepta (Cfr. foja 4 del expediente judicial).

Quinto: No es un hecho; por tanto, se niega.

Sexto: No es un hecho; por tanto, se niega.

II. Disposiciones que se aducen infringidas.

La apoderada judicial de la demandante señala que el acto acusado de ilegal infringe las siguientes disposiciones:

A. El artículo 1 de la Ley 39 de 11 de junio de 2013, modificado por el artículo 3 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, derogadas por la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, el cual establecía que los servidores públicos al servicio del Estado, al momento de la terminación de la relación laboral, cualquiera que fuera la causa de terminación, tenían derecho a recibir del Estado una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado al servicio del mismo en forma continua, aunque hubiese sido en diferentes entidades del sector público (Cfr. fojas 4 y 5 del expediente judicial); y

B. El artículo 6 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, derogada por la Ley 23 de 12 de mayo de 2017, que señalaba que la primera excerpta legal comenzaba a regir el 1 de abril de 2014 (Cfr. foja 5 del expediente judicial).

III. Breves antecedentes del caso y descargos de la Procuraduría de la Administración, en representación de los intereses de la entidad demandada.

De acuerdo con las constancias que reposan en autos, la Contraloría General de la República emitió la Resolución 514-DDRH de 24 de agosto de 2016, mediante la cual el regente de esa entidad reconoció el derecho al pago de prima de antigüedad a **Cecilia Esther Torres Tapia**, por la suma de seiscientos cuarenta y cuatro balboas (B/.644.00), equivalente al período trabajado del 1 de enero de 2014 al 24 de febrero de 2015 (Cfr. foja 8 del expediente judicial).

Posteriormente, en tiempo oportuno, **Cecilia Esther Torres Tapia** interpuso un recurso de reconsideración en contra del acto principal, el cual fue confirmado por medio de la Resolución 2117-17-Leg de 26 de diciembre de 2017, misma que le fue notificada a la hoy recurrente el 1 de febrero de 2018, con lo que quedó agotada la vía gubernativa

Producto de la situación expuesta, la actora, **Cecilia Esther Torres Tapia**, por medio de su apoderada judicial, presentó ante la Sala Tercera la demanda que dio origen al proceso que ocupa nuestra atención, cuyo objetivo es que se le haga efectivo el pago de la prestación laboral de prima de antigüedad, por la suma de diez mil ciento sesenta y ocho balboas con treinta centésimos (B/.1,178.30), calculada desde el 1 de noviembre de 2011, fecha en la que inició la relación laboral con la Contraloría General de la República, hasta el 24 de febrero de 2015, cuando presentó su renuncia (Cfr. foja 3 del expediente judicial).

Al sustentar el concepto de las normas que aduce infringidas, la apoderado judicial de la accionante manifiesta que ésta tiene derecho al pago del monto de la prima de antigüedad que reclama, puesto que la cancelación de tal prestación laboral es a razón de una semana de salario por cada año trabajado, por lo que, según expone, es un error de interpretación por parte de la Contraloría General de la República calcular dicha retribución a partir de la vigencia de la ley, pues, a su juicio, de acuerdo con lo que establecía la derogada disposición legal y la jurisprudencia sentada por la Sala Tercera, el cálculo del derecho laboral en referencia debe realizarse desde la fecha en que el funcionario inició labores en la institución y se mantuvo de manera ininterrumpida al servicio de la Administración Pública (Cfr. fojas 2-4 del expediente judicial).

Una vez examinada la solicitud realizada por la recurrente, en la que fundamenta su pretensión, este Despacho considera que la misma debe ser desestimada por el Tribunal, por las razones de hecho y de Derecho que expondremos a continuación.

Para lograr una mejor aproximación al tema objeto de análisis, es necesario señalar que el **artículo 1 de la Ley 39 de 11 de junio de 2013, modificado por el artículo 3 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013**, actualmente derogada, era claro al indicar que: *“Los servidores públicos al servicio del Estado, al momento de la terminación de la relación*

una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado al servicio del Estado en forma continua...” (El resaltado es nuestro).

Del contenido de dicha norma se infiere, sin lugar a dudas, que es precisamente al momento de la terminación de la relación laboral, que el interesado debe formular a la institución correspondiente una petición para que ésta le reconozca el derecho reclamado; es decir, la prima de antigüedad, tal como ocurrió en la situación bajo estudio cuando el 25 de febrero de 2015, a la accionante mediante la Resolución 19-DDRH de 2 de enero de 2015, se dejó sin efecto su nombramiento, a partir del 25 de febrero de 2015, en la entidad demandada (Cfr. foja 7 del expediente judicial).

No obstante lo anterior, debemos precisar que si bien le asiste a **Cecilia Esther Torres Tapia** el derecho al reconocimiento del pago de la prima de antigüedad por parte de la Contraloría General de la República, como hemos expresado en líneas anteriores, y como en efecto fue realizado por medio del acto objeto de reparo, lo cierto es que para el cálculo de dicha prestación laboral solamente puede ser computado desde el período que comprende del 1 de abril de 2014 hasta el 24 de febrero de 2015.

Lo anterior es así, toda vez que el artículo 3 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, que modificó el artículo 1 de la Ley 39 de 2013, disponía que los servidores públicos al servicio del Estado al momento de la terminación de la relación laboral, tendrían derecho a recibir del Estado una prima de antigüedad; sin embargo, **no podemos perder de vista que a dicha norma no se le puede conceder un alcance de carácter retroactivo**, según lo que establece el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Panamá, **por no tratarse de una ley de orden público o de interés social; siendo que la mencionada ley entró a regir el día 1 de abril de 2014, es a partir de entonces que se debe empezar el reconocimiento al funcionario del derecho otorgado en su normativa; es decir, el pago de la prima de antigüedad.**

Basta recordar, que es la propia Ley 39 de 11 de junio de 2013, modificada por la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, la que debió especificar cómo cuantificar la prima de antigüedad para aquellas personas que entraron a laborar antes y después de la entrada en vigencia de esa legislación, de tal suerte que dicho derecho solo podrá ser computado en uno u otro caso, a partir del 1 de abril de 2014.

En este contexto, esta Procuraduría estima necesario resaltar lo indicado por la entidad demandada en la Resolución 2117-17-Leg. de 26 de diciembre de 2017, a través de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la ex servidora, cuyo contenido medular dispone lo siguiente:

“

...

Que analizados los elementos presentados por la reclamante, nos remitimos a la norma aplicable, el Artículo 1 de la Ley 39 de 11 de junio de 2013, modificado por el Artículo 3 de la Ley 127 de 31 de diciembre de 2013, dado que el nombramiento de la ex servidora fue dejado sin efecto el 24 de febrero de 2015.

...

...podemos concluir que la resolución impugnada se ajustó a Derecho, toda vez que le fue reconocido el derecho a recibir el pago de la Prima de Antigüedad del tiempo trabajado desde 1 de enero de 2014, fecha en que entró a regir la Ley 39 de 11 de junio de 2013, hasta el 24 de febrero de 2015, fecha en que fue dejado sin efecto el nombramiento de la ex servidora, período en que nace a la vida jurídica este derecho y en el que únicamente tiene derecho.

Que en virtud del principio de la irretroactividad de la ley, reconocido en el Artículo 46 de la Constitución Política de la República que dice que ‘las leyes no tienen efectos retroactivos...’, por lo que para los efectos del cálculo de la prima de antigüedad sólo debe computarse como tiempo laborado en forma continua los servicios a partir de cuándo empezó a regir la ley, dada que ésta no tiene efectos retroactivos, ni expresa el carácter de orden público o de interés social, como para que tengan efectos retroactivos y aplicarse situaciones que ocurrieron antes de su vigencia” (Lo resaltado es nuestro) (Cfr. foja 9-11 del expediente judicial).

Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, este Despacho solicita respetuosamente a ese Tribunal se sirva declarar que **NO ES ILEGAL la Resolución Número 514-DDRH de 24 de agosto de 2016**, emitida por la Contraloría General de la República, ni su acto confirmatorio, en consecuencia, que se nieguen las pretensiones de la recurrente.

IV. Pruebas. Se **aduce** como prueba documental de esta Procuraduría, la copia debidamente autenticada del expediente de personal de la accionante, cuyo original reposa en la Contraloría General de la República.

V. Derecho: No se acepta el invocado por la actora.

Del Señor Magistrado Presidente,


Rigoberto González Montenegro
Procurador de la Administración


Mónica I. Castillo Arjona
Secretaría General